

Ayotzinapa y la estirpe insumisa del normalismo rural

César Navarro Gallegos*

El país ha vivido durante estos meses en un entorno de profundo descontento social y de intensa movilización como no había ocurrido hace tiempo. Ayotzinapa y los normalistas rurales han sido el catalizador para el repunte de este renovado activismo de grupos y organizaciones sociales que exigen un país en el que se pongan por delante y se respeten la vida y los derechos sociales de los mexicanos. El futuro y la lucha lo dirá, pero la prioridad seguirá siendo la ubicación y el retorno de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y de otros en su misma condición.

La tragedia y la masacre de Iguala cimbraron intempestivamente a la sociedad mexicana y puso de manifiesto, en forma dramática y dolorosa, la olvidada presencia del normalismo rural. Los jóvenes asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa pertenecen a una comunidad estudiantil con rasgos y tradiciones heredados del proyecto educativo que dio origen a su escuela rural. Ayotzinapa y el conjunto de las Normales Rurales surgieron para formar y dotar de maestros a las escuelas públicas de las poblaciones rurales. Su multiplicación y fortalecimiento se produjo al unísono con la renovación de las luchas agrarias que conquistaron la tierra para decenas de miles de campesinos e hicieron posible

la fundación de escuelas rurales en todo el territorio nacional. *Tierra y educación* fueron los fundamentos originarios que orientaron la existencia de las Normales Rurales en los años del Cardenismo, y desde entonces han constituido un bastión esencial en la historia y evolución de la educación pública mexicana.

La emergencia del normalismo rural hizo posible el derecho y acceso a la educación para los más pobres: jóvenes de comunidades indígenas y campesinas. Escuelas-internados públicos y gratuitos para mujeres y hombres, bajo un modelo formativo en el que se combinaron el estudio con el trabajo de sus estudiantes. Una parte importante de su sostenimiento material proviene de las actividades agrícolas y productivas que desarrollan sus alumnos, las cuales al mismo tiempo

contribuyen con su preparación como futuros maestros rurales. Son comunidades escolares que estudian y trabajan. El contexto social y educativo en el que surgieron las Normales Rurales desde un principio las hermanó con las demandas y luchas sociales de pueblos y campesinos. Ser parte de la comunidad a través de su labor educativa y participar de sus preocupaciones y aspiraciones sociales fueron ejes que definieron el perfil educativo y el compromiso social de los maestros formados en esas instituciones educativas. Esto entrañó la formación de una arraigada conciencia social y política y una consistente tradición organizativa entre las comunidades estudiantiles del normalismo rural. De esa historia y de esa estirpe son descendientes y depositarios los estudiantes masacrados y desaparecidos de Ayotzinapa.

* Historiador. Universidad Pedagógica Nacional-Instituto Mora.

Persecución y mutilación del normalismo rural

Las sucesivas regresiones educativas y el sistemático abandono de los principios fundamentales que habían orientado la educación pública mexicana paulatinamente condujeron a la implantación de modelos educativos cada vez más distantes y en oposición a los proyectos educativos que en otros tiempos se propusieron impulsar la inclusión y la equidad social, garantizar la universalización del derecho a la educación y su reivindicación como patrimonio social y colectivo de los mexicanos; estos modelos finalmente devinieron en la imposición de la educación mercantilista, privatizadora y excluyente de corte neoliberal que desde hace décadas se cierne sobre el sistema educativo nacional. Desde esta perspectiva, las Normales Rurales se fueron visualizando como remanentes de otras épocas educativas, como modelos que están a contracorriente con el rumbo de las “nuevas” políticas educativas eficientes y modernizadoras.

Del sistema de escuelas-internados creado durante el periodo de la educación socialista —conformado por escuelas de enseñanza primaria, escuelas secundarias para hijos de trabajadores y las Normales Rurales, instituciones que existían en la mayoría de las entidades del país y que incluían además al Instituto Politécnico Nacional— sólo pudieron subsistir las Normales Rurales. El internado del Politécnico Nacional fue clausurado en 1956 como respuesta a la huelga estudiantil que demandaba recuperar el proyecto original de su centro de estudios, modificar los reglamentos institucionales y mejorar las condiciones del internado. El ejército se apoderó de las instalaciones del IPN y el gobierno federal dictó el cierre del internado. Centenares de estudiantes fueron encarcelados y muchos de ellos expulsados de la institución. A los dirigentes del movimiento estudiantil se les condenó a prisión acusados del delito de “disolución social”, norma penal utilizada por primera vez para criminalizar a los participantes de una movilización social, y que en los siguientes años se utilizaría como instrumento de uso común para perseguir y encarcelar a los líderes de movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles¹. Durante cerca de dos años, los soldados mantuvieron la ocupación del Politécnico para vigilar e impedir que los estudiantes retomaran su lucha.

¹ Uno de los puntos del pliego petitorio del movimiento estudiantil de 1968 era el referido a la abrogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que contemplaba el delito de disolución social. Después del movimiento de 1968, fue eliminado.

A partir de esa época, el proyecto popular destinado a dar cobertura educativa a los humildes y excluidos se fue desvaneciendo y las Normales Rurales navegarían solitarias y resistentes en medio de las turbulencias de la marea conservadora de las políticas educativas del Estado mexicano. Por sus orígenes, orientación y composición social, las Normales Rurales se convirtieron en las instituciones más asediadas y perseguidas del sistema educativo por los sucesivos gobiernos del país. Ninguna otra institución educativa ha tenido que enfrentar y resistir las políticas de exterminio diseñadas desde el poder público.

Uno de los golpes más lesivos al normalismo rural se produjo durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Con el pretexto de la huelga sostenida por los estudiantes “campesinos y socialistas” en 1969, todas las escuelas fueron tomadas simultáneamente por el ejército y cuerpos policíacos, y por decisión del gobierno federal y las autoridades educativas del país fueron clausuradas de un solo tajo más de la mitad de las Normales Rurales. De treinta y seis escuelas existentes, sólo sobrevivieron diecisiete. Pese a la lucha desplegada por los normalistas para preservar sus centros educativos, no fue posible evitar la mutilación del normalismo rural. A través de la represión, intimidación y expulsión de decenas de alumnos, finalmente se impuso el golpe del poder estatal. En tanto, centenares de alumnos de las escuelas cerradas fueron “exiliados” a las Normales de otros estados, lo que hizo inviable para muchos la continuidad de sus estudios y provocó la deserción de gran número de estudiantes. Igualmente se eliminó el ciclo de enseñanza secundaria, integrado entonces al plan de estudios de las Normales Rurales. Con la clausura de las escuelas y la eliminación del ciclo secundario, súbitamente la matrícula estudiantil se redujo más del cincuenta por ciento (Navarro, 2011).

La clausura no se fundamentó en decisiones de orden educativo, ni debido a que existiese sobrepoblación estudiantil en las escuelas o no se requirieran maestros provenientes de las Normales Rurales para el sistema educativo. Fue ante todo una decisión política motivada por los conflictos sociales que sacudían al país. Junto con la revitalización de luchas y movimientos campesinos, sindicales y estudiantiles, habían surgido también insurrecciones armadas en varias zonas rurales del país, integradas principalmente por campesinos y maestros: el Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua y Durango en 1965, dirigido por el profesor Arturo Gámiz, y poco después la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres Brigada Campesina de Ajusticiamiento en Guerrero, que

estaba bajo la conducción de los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, respectivamente. El hecho de que los profesores que encabezaban los movimientos guerrilleros procedieran del normalismo rural o hubieran participado previamente al lado de sus estudiantes en diversas luchas y movilizaciones sociales, provocó que desde la perspectiva gubernamental se concluyera que las Normales Rurales constituían un foco de incubación de la guerrilla, y que sus estudiantes eran bases de apoyo de los grupos insurrectos. Bajo esta percepción política, la estrategia para acallar la rebelión consistió en combatir militarmente a la guerrilla y reprimir a los pobladores de las comunidades, considerados sus aliados o partidarios, y por otra parte avanzar en la eliminación del normalismo rural. Esa fue la razón de fondo, nunca explicitada abiertamente, que determinó la clausura de las Normales Rurales en 1969.

Para los estudiantes “campesinos y socialistas”, los profesores de la guerrilla encarnan y simbolizan uno de los ejemplos más trascendentes y representativos del compromiso social del maestro rural con su pueblo. Son parte entrañable y esencial de su historia y de ellos se sienten profundamente orgullosos. Nunca en la etapa de la lucha armada condenaron su camino, ni en el presente han renegado de su ejemplo. Simbólicamente, día con día conviven con ellos: en las pinturas murales de sus escuelas, una tradición muy propia de los normalistas rurales. Siempre están presentes las imágenes de Arturo, Lucio y Genaro, al lado de otros revolucionarios mexicanos y del mundo. Esto ha dado pie a los mitos y falacias que reiteradamente difunden los adversarios de las Normales Rurales para afirmar que son “nido de guerrilleros”; esta es una coartada para exigir su desaparición definitiva. En las “rurales” se forman maestros y ciertamente de sus filas han emergido profesores que, junto con su tarea docente, se han destacado como activistas y dirigentes magisteriales, sociales y políticos. Pero estos luchadores sociales se han formado esencialmente en las luchas a las que se han incorporado por decisión propia; en todo caso, para muchos de ellos su paso por el normalismo rural los hizo sensibles y conscientes de la injusticia y la desigualdad social en nuestro país.

Reclamos y demandas de los normalistas rurales

Las movilizaciones que recurrentemente despliegan los normalistas rurales por todo el país son expresión de una larga y tenaz resistencia para preservar y mejorar sus centros escolares y reclamar el derecho a la educación

para otros como ellos: indígenas, campesinos y pobres. Ante la precariedad e insuficiencia de recursos que permanentemente padecen sus escuelas como consecuencia de la política de discriminación y abandono por parte del gobierno y las autoridades del sistema educativo, han aprendido que la única forma para hacerse escuchar es a través de la protesta, la movilización masiva y la resistencia activa y radical. Sus escuelas son las más empobrecidas y con menor presupuesto dentro del universo de la educación superior del país. Sus instalaciones, equipamiento educativo e infraestructura escolar no son en modo alguno las que necesitan y deberían disponer esos centros educativos, dadas las carencias materiales de sus comunidades escolares. En suma, escuelas pobres para estudiantes pobres, a tono con la desigualdad e inequidad educativas: rasgos que caracterizan a la educación mexicana.

Sin embargo, sus demandas y reclamos educativos regularmente obtienen como respuesta gubernamental la amenaza del cierre de sus escuelas, disposiciones autoritarias o la persecución y la represión. La masacre de Iguala se inscribe dentro de ese patrón y constituye el ejemplo más reciente de la agresividad del poder público hacia los normalistas rurales. Desde hace tiempo caminan al filo de la sobrevivencia y por ello no es gratuito que las movilizaciones estudiantiles de los normalistas rurales enarboleden demandas muy similares en todo el país: 1) oposición a la disminución de la matrícula de ingreso —la cual ha registrado un decrecimiento sostenido desde hace más de dos décadas debido a las “reformas” educativas impuestas a la enseñanza Normal—; 2) preservación del sistema escuela-internado para seguir posibilitando el acceso a la formación profesional de jóvenes carentes de recursos, cuya única alternativa de estudio la constituyen las “rurales”; 3) resguardar los planes y programas de estudio específicos para la formación de los profesores rurales, que gradualmente se han desarticulado a través de los procesos de estandarización y homogenización del sistema educativo, y que en el caso de sus instituciones significa desmontar la preparación e identidad del maestro rural; 4) fortalecimiento de la vida académica mediante la ampliación de la planta de profesores idóneos para la enseñanza en sus escuelas, ampliación del presupuesto y equipamiento suficientes y acordes con las necesidades escolares; 5) preservar el modelo educativo de estudio-trabajo; 6) disponer de instalaciones e infraestructura adecuadas y dignas en dormitorios, servicios sanitarios, enfermería y comedores; 7) aumento a la beca alimentaria para no seguir padeciendo el hambre de siempre y las consecuencias en su salud por la deficiente alimentación

—cabe mencionar que el monto de la beca-ración para sus alimentos se mantiene, desde hace años, en un promedio que oscila entre la “fabulosa y dispendiosa” suma de treinta y cinco pesos diarios—. Por ello, desde hace mucho tiempo los normalistas, en forma irónica, han reclamado que los “traten igual que a los caballos del ejército” en materia alimentaria, y cuando menos se les otorgue el equivalente económico presupuestado para los equinos con “uniforme”. Asimismo, exigen la dotación de medios de transporte suficientes para sus prácticas pedagógico-docentes que en forma cotidiana realizan en las escuelas primarias de sus regiones, distantes en muchas ocasiones de su Normal; por lo que ante la insuficiencia de transporte para su traslado, su costo debe ser asumido por los propios estudiantes o viajan de “aventón”, forma comúnmente usual entre los jóvenes de las “rurales”.

Esta última cuestión no es un asunto menor para los normalistas. El hecho de que no cuenten con medios de transporte para cubrir sus tareas y actividades escolares, pedagógicas y estudiantiles, los ha inducido a resolver por sí mismos esta problemática que se vive en todas sus escuelas. La ocupación de transportes y autobuses que con frecuencia llevan a cabo es una práctica orillada en gran medida por estas necesidades. En el caso de la Normal de Ayotzinapa, sólo se cuenta con un viejo “autobús” que el gobierno estatal recicló como transporte estudiantil: anteriormente era utilizado por la policía estatal. La masacre de Iguala está relacionada con esta situación que padecen los normalistas; si su escuela contara con suficientes medios de transporte, muy posiblemente no habrían tenido que buscarlos en Iguala. Su carencia implica una responsabilidad más del gobierno guerrerense por el desinterés y el abandono de esa comunidad educativa.

Batallas y movilizaciones de los estudiantes “campesinos y socialistas”

Los conflictos y movimientos estudiantiles que en forma reiterada y persistente suceden en las Normales Rurales de todo el país, como se ha señalado, generalmente están articulados a problemáticas que les son comunes. Año con año se producen conflictos en alguna Normal o simultáneamente en varias de ellas, y parecen ser una constante en la vida de esos centros de estudio. La descripción de algunos conflictos ocurridos en las Normales Rurales es ilustrativa de las motivaciones y naturaleza de los mismos, así como de las formas de lucha que han asumido sus comunidades estudiantiles ante la recurrente hostilidad gubernamental.

Revolta popular en defensa de la Normal Rural de El Mexe

En la madrugada del 19 de febrero del año 2000, la Normal Rural de El Mexe, Hidalgo, fue asaltada por más de trescientos granaderos. Como si se tratara de un operativo contra un grupo criminal, los policías rodearon la escuela con decenas de camionetas, patrullas y autobuses, y luego entraron a sus instalaciones disparando al aire y apuntando con sus armas a los estudiantes y familiares que los acompañaban dentro de la Normal. Iban pertrechados con fusiles de alto poder, lanzagranadas, pistolas, máscaras antigás, escudos y toletes. Arremetieron y golpearon a mujeres, niños, ancianos, campesinos y estudiantes, sin distinción. Una vez desalojados, la Normal fue ocupada y puesta bajo custodia de los granaderos. Cerca de tres centenares de estudiantes, hombres y mujeres, fueron detenidos y trasladados en autobuses a diversas cárceles de la entidad. Unas horas antes, en la capital del estado, otro grupo de granaderos había acordonado la Plaza Juárez y había desalojado —a punta de macana y puntapiés— a estudiantes de El Mexe y otras Normales Rurales, a familiares y ciudadanos que apoyaban el plantón que los hidalguenses mantenían frente al palacio de gobierno. Fueron detenidas más de novecientas personas, en su mayoría alumnos de Normales Rurales de Morelos, Guerrero y Tlaxcala, entre otras. Éstos fueron obligados a abordar autobuses y luego fueron “deportados” de Hidalgo a las entidades de donde provenían. En tanto, 36 estudiantes de El Mexe fueron encarcelados, acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, daño en propiedad y motín. Para la mañana de ese día, tras las represiones de Pachuca y El Mexe, los normalistas encarcelados sumaban más de cuatrocientos.

Sin embargo, la respuesta popular en apoyo a los estudiantes agredidos se manifestó rápidamente en forma masiva y dispuesta a recuperar la escuela y exigir la libertad de los estudiantes encarcelados. Para el mediodía, centenares de habitantes de las poblaciones aledañas —hombres, mujeres y padres de familia, en su mayoría campesinos— se congregaron alrededor de la escuela. Demandaron la desocupación inmediata de la Normal, pero ante la negativa de las autoridades estatales y jefes policiacos, el coraje popular se acrecentó, y pese a los riesgos decidieron enfrentar a los granaderos para recuperarla. Sitiaron el plantel con troncos y piedras, bloquearon los accesos y establecieron un cerco sobre los granaderos que ocupaban la escuela. Luego prendieron fuego a los materiales con los que habían bloqueado las entradas e incendiaron vehículos policiacos. Con palos

y piedras se abalanzaron y enfrentaron a los granaderos. La ira se desbordó. La determinación con la que actuaron los pobladores provocó la desbandada de los policías y la escuela fue recuperada.

La mayoría de los granaderos lograron escabullirse a bordo de camionetas de su corporación en medio de un diluvio de piedras e insultos de la población. No todos tuvieron la suerte de montarse en su “cheroque”. Los actores de la revuelta capturaron 68 granaderos que fueron desarmados, descamisados y descalzados, y llevados a pie hasta la plaza principal de la cabecera municipal de Tepatepec, que se encuentra a cinco kilómetros de El Mexe. Durante todo el día, los agresores de los normalistas permanecieron en la plaza, custodiados por los pobladores. Asimismo, expusieron el arsenal que quitaron a los policías: 15 armas largas, fusiles R-15 y escopetas calibre 12, lanzagranadas, miles de cartuchos, máscaras antigás, escudos y toletes. Los pobladores, padres de familia y estudiantes establecieron como condición al gobierno estatal, para soltar a los retenidos, poner fin a la persecución y represión a los normalistas de El Mexe, liberar a los estudiantes encarcelados y resolver las demandas que habían desencadenado el conflicto que durante más de dos meses enfrentaban los normalistas de El Mexe.

En contraste con la actitud soberbia y de rechazo mantenida hasta entonces por el gobierno y las autoridades educativas para dialogar y atender las demandas estudiantiles, en cuestión de horas se vieron obligados a resolver las exigencias de la población y de los normalistas. Esa misma noche liberaron a los estudiantes encarcelados, desistieron de las órdenes de aprehensión contra los representantes de los normalistas y cancelaron los procesos penales de 80 alumnos. Igualmente, la agenda de negociación incluyó el acuerdo para ampliar la matrícula de ingreso a la institución, el aumento de plazas para que sus egresados puedan incorporarse al trabajo magisterial, y la reestructuración académica y normativa planteada por la comunidad estudiantil. Pero el mayor logro obtenido por la movilización estudiantil y la revuelta popular en defensa de El Mexe fue la permanencia de la Normal Rural. Tras 62 días de conflicto, la Normal “Luis Villarreal” retornó otra vez a ser escuela. Esto fue posible gracias a la acción conjunta de la población campesina y los estudiantes, producto de una añeja relación de lucha y solidaridad sostenida entre ambos. Este compromiso se hizo manifiesto a través de las palabras de un campesino participante en el enfrentamiento con los granaderos en la recuperación de la Normal: “Que le den gracias a dios que no se usaron los machetes... porque nos estaríamos

lamentando todos. Ni ellos ni nosotros estaríamos vivos” (Navarro, 2001: 160).

Es pertinente señalar que más adelante, los estudiantes de esa Normal enfrentarían otros acontecimientos, definitivos para la existencia misma de su institución, que el operador político y ejecutor de la represión durante el conflicto estudiantil de El Mexe fue justamente el entonces subsecretario de gobierno de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, actual Secretario de Gobernación a nivel federal. A pesar de las evidencias sobre los actos de represión y las armas utilizadas por los granaderos para asaltar a la Normal, Osorio Chong cínicamente afirmó que “la policía no iba armada”, por lo que el gobierno iniciaría una investigación orientada a descubrir “la posible vinculación que los estudiantes podrían haber tenido con las armas” exhibidas por la población (Navarro, 2001: 161).

Desafortunadamente, la cacería política contra los estudiantes de El Mexe no concluyó tras el conflicto, por el contrario: se intensificó. El asedio a los normalistas a la postre generó una serie de contradicciones en el seno de la comunidad estudiantil que propiciarían las condiciones para que el gobierno pudiera asestar el golpe final a su escuela, dictado y ejecutado por el entonces gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, hoy procurador general de la República y responsable directo de la investigación sobre la masacre de Iguala y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En 2003, la Normal Rural de El Mexe fue clausurada y se cerraron las puertas de su histórica presencia. Sin embargo, otros normalistas rurales en otros lugares continuarían en la brega y resistencia de siempre.

Ayotzinapa 2011 y Tiripetío 2012

Al grito de “¡Órale, cabrones!”, el general Ramón Arreola –subsecretario de seguridad de Guerrero– mandó a los policías estatales para que empezaran a disparar. Así inició el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, con armas de fuego. El saldo de la represión fue dos normalistas asesinados, tres heridos de bala y decenas de estudiantes golpeados, encarcelados y torturados. La madre de uno de los estudiantes asesinados, adolorida y lamentando su muerte, dijo: “mi hijo no era un asesino, nomás fue a una escuela de pobres” (Navarro, *La Jornada*, 2011). Sin embargo, su hijo y sus compañeros fueron perseguidos como si se tratara de un grupo de criminales o asesinos.

Ese día, más de quinientos estudiantes de la Normal Rural habían llegado a Chilpancingo para demandar nuevamente una audiencia al gobernador que durante meses les

había negado. Para reiterar y hacer patente su exigencia, determinaron bloquear el tránsito de la Autopista del Sol. Las razones que condujeron a la movilización de los normalistas ese día estaban latentes desde meses atrás. En septiembre, como cada inicio del ciclo escolar, a través del comité estudiantil presentaron un pliego de demandas ante el gobierno estatal; las exigencias estaban enfocadas en las necesidades materiales de la escuela y su comunidad educativa. El gobernador perredista Ángel Aguirre aceptó las peticiones normalistas y se comprometió a darles solución. En el pliego solicitaban aumentar la “ración” alimenticia de 35 a 50 pesos diarios; reparación y reacondicionamiento de baños, dormitorios, comedores y del edificio de la escuela –todos en franco deterioro ante la falta de mantenimiento durante años–; incrementar la matrícula de ingreso de 140 a 170 alumnos (la estratosférica cifra de treinta alumnos más), así como garantizar el acceso al trabajo magisterial a los profesores egresados de la Normal, entre otras cuestiones. Sin embargo, el gobernador incumplió el acuerdo y optó por no dar la cara y evadir a los normalistas, al mismo tiempo que metió la mano para imponer al frente de la dirección de la escuela a un académico rechazado por profesores y estudiantes, lo cual derivó en un paro de actividades.

Hartos de la actitud gubernamental, emprendieron la movilización de Chilpancingo del 11 de diciembre. Poco después de iniciado el bloqueo, aparecieron más de 300 efectivos de las policías federal, estatal y ministerial. En principio intentaron desalojar a los normalistas y se produjo un primer enfrentamiento a golpes, empujones y pedradas que repelió la acción policiaca. Tras este intento fallido se estableció un cerco policiaco y elementos de esas corporaciones y otros, vestidos de civil, se apostaron en puentes y azoteas de edificios en posición de francotiradores. Los federales empezaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno y a disparar sus armas. Tras estos primeros disparos se precipitó la balacera por parte de los demás cuerpos policiacos contra los manifestantes y los autobuses que los habían transportado. Según el informe de la CNDH, la lucha se prolongó durante más de veinte minutos. Algunos estudiantes se enfrentaron todavía a la policía, otros se dispersaron hacia cerros aledaños y muchos fueron sometidos violentamente y golpeados. Más de cuarenta normalistas fueron encarcelados y gran parte de ellos fueron torturados. Tres resultaron heridos por arma de fuego, pero la artera agresión dejó sin vida a dos estudiantes: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús (CNDH, 2012).

Han pasado tres años, y a pesar de que diversas instancias de derechos humanos constataron la legitimidad y

legalidad de la protesta estudiantil y acreditaron la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes, así como los delitos de tortura y detención ilegal en agravio de decenas de estudiantes, los autores y ejecutores responsables de la represión siguen impunes. Mientras tanto, sus familiares y compañeros siguen, hasta hoy, reclamando justicia. La ominosa represión de Iguala, los jóvenes ejecutados y los 43 estudiantes desaparecidos constituyen un nuevo capítulo en la historia de las sanguinarias e irracionales agresiones de las que han sido víctimas los normalistas de Ayotzinapa.

Unos meses después de los sucesos de Chilpancingo, normalistas rurales y estudiantes de otras dos Normales públicas de Michoacán fueron agredidos brutalmente. Más de mil 500 policías federales, estatales y municipales tomaron por asalto, en la madrugada del 15 de octubre de 2012, las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, la Normal Indígena de Cherán y la Normal Rural de Tiripetío. Los estudiantes enfrentaron a sus atacantes y en la refriega se incendiaron varios autobuses. Sin embargo, la golpiza policiaca dejó decenas de lesionados, varios heridos con armas de fuego y 176 estudiantes fueron encarcelados (Goche, 2012).

Durante más de dos meses, los estudiantes habían pedido dialogar con el gobierno estatal para solicitar posponer la aplicación del “nuevo” plan de estudios decretado por las autoridades educativas. Cuestionaban que se hubiera diseñado sin tomar en consideración los contenidos educativos requeridos para la formación del maestro rural e indígena en sus escuelas. Igualmente, el énfasis puesto en el aprendizaje del inglés, que se traducía en cinco cursos dentro del nuevo plan y que prácticamente eliminaba el aprendizaje de las lenguas de los pueblos originarios y de sus culturas, pues se reducían a uno o dos cursos optativos. Reclamaban también el peso que se otorgaba al estudio y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, desvinculado en gran medida de su ejercicio como docentes rurales en un entorno generalmente empobrecido y de exclusión social. No se oponían a esos aprendizajes, pero pensaban en un plan de estudios más acorde a sus necesidades educativas y a sus tareas en escuelas de pueblos y comunidades. Por ello, plantearon la elaboración de un plan de estudios que integrara sus propuestas, pero no se aceptó. Ante la reiterada negativa del gobierno para escuchar sus argumentos, optaron por la realización de “paros” y la retención de decenas de autobuses y camiones en sus escuelas para empujar el diálogo.

La represión desató una amplia movilización popular que defendía y se solidarizaba con los normalistas. Miles de

maestros democráticos de la sección XVIII del SNTE desplegaron múltiples movilizaciones para demandar el cese de la represión y la liberación de los detenidos. Igualmente, pobladores de comunidades indígenas y campesinas se alzaron apoyando a los jóvenes; muchos de ellos eran sus hijos. Durante varias semanas, la entidad fue escenario de un intenso descontento social, alentado por la incorporación de organizaciones populares y cientos de ciudadanos. Simultáneamente, normalistas rurales y maestros en otros sitios del país realizaron marchas y actos públicos que condenaban la represión hacia los estudiantes michoacanos. La movilización magisterial, comunitaria y popular en Michoacán, más el respaldo manifestado en otras entidades, finalmente obligó al gobierno a liberar a los estudiantes y se convino con los normalistas posponer temporalmente la reforma al plan de estudios. Actualmente, la lucha para impedir su imposición sigue vigente.

Las Normales Rurales. Cifras de marginación y exclusión

Una de las múltiples formas de privatización de la educación pública ha consistido en la cesión de territorios educativos que han sido colonizados por los consorcios y empresas educativas privadas. Este es un hecho presente en todos los niveles del sistema educativo nacional: desde la educación inicial hasta la educación superior. En tanto se multiplican y consolidan miles de escuelas privadas, en forma inversamente proporcional se deterioran y precarizan las condiciones en las que subsisten la mayoría de las escuelas públicas, sobre todo de enseñanza básica y Normal. Las tendencias privatizadoras han socavado particularmente los centros públicos para la formación docente, reflejado en la disminución de su proporción dentro del sistema de enseñanza Normal, ante un número cada vez más creciente de establecimientos particulares, así como en lo relativo a su población escolar. Aun cuando el total nacional de la matrícula estudiantil en las Normales ha disminuido, la creación de escuelas privadas y su matrícula caminan a la alza.

Según datos oficiales, en 2007 existían en el país 468 Escuelas Normales, de las cuales 287 eran públicas y 181 privadas, con una población escolar general cercana a 160 mil estudiantes. En tanto que para el ciclo escolar 2012-2013, el total de Escuelas Normales era de 489, de las cuales 271 eran públicas y 218 privadas, con una matrícula general de un poco más de 134 mil estudiantes. Esto indica que en ese lapso, dieciséis Normales públicas dejaron de funcionar, mientras que en ese mismo periodo fueron

creadas 37 nuevas escuelas privadas. La presencia de estas últimas dentro del sistema de enseñanza Normal ascendió al 38%. Al mismo tiempo, la matrícula general del normalismo descendió en alrededor de treinta mil estudiantes.

Estadísticas de Escuelas Normales a nivel nacional 2012-2013	
Total de Escuelas Normales	489
Públicas	271
Privadas	218
Total de alumnos	134,420
Ingreso	35,853
Egreso	30,326
Titulados	28,591

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEP-DGESPE, SIBEN, SNIEE.

Sin embargo, el mayor decrecimiento registrado en la enseñanza Normal ha sido justamente el referido a las Normales Rurales. De entre 489 centros educativos para la formación de maestros, solamente diecisiete corresponden a las Escuelas Normales Rurales, que en su conjunto apenas representan el 3.5% del universo normalista, con una población escolar de 6,650 estudiantes, que equivale a menos del 5% de la matrícula total en el país. El ingreso anual a todas las Normales es cercano a 36 mil estudiantes, pero de este total sólo 1,721 logran ingresar a las "rurales", que corresponde a un 4.8%. El egreso anual de maestros de las Normales Rurales (1,553) ha descendido en relación con el del resto de escuelas normalistas (30,326) y sólo constituye el 5%. Sin embargo, los índices de titulación de sus egresados son superiores al 94%: muy por encima del promedio en otras Normales y la mayoría de las instituciones de educación superior del país.

Además de perseguidas y empobrecidas, las Normales Rurales han sido arrinconadas y marginadas dentro del sistema educativo nacional. La política educativa hacia estas instituciones ha resultado adversa para su fortalecimiento y continuidad, y además están sometidas a un régimen de excepción que apuesta a su gradual debilitamiento y declive, que a su vez ha servido como argumento para el propio gobierno, las autoridades educativas, los partidos políticos, la derecha empresarial y el SNTE para cuestionar la viabilidad de su permanencia y plantear su extinción.

Por su parte, las luchas y movilizaciones de los normalistas rurales encarnan la apuesta por la supervivencia de sus escuelas, su futuro como maestros rurales, la preservación de su proyecto educativo popular, la resistencia para que sigan abiertas las puertas de las escuelas públicas para los

marginados y excluidos. Todo esto está ligado a las aspiraciones del cambio social en nuestro país.

ejemplos. Pero además, la reprobación escolar no tiene carta de naturalidad en estas instituciones: el estudiante que

Escuelas Normales Rurales en México (matrícula escolar y egreso 2012-2013)

Nombre de la escuela	Alumnos	1er. ingreso	Egresados	Titulados
Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" Cañada Honda, Aguascalientes	433	120	85	85
Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" Hecelchakan, Campeche	287	75	82	81
Escuela Normal Rural "Mactumactzá" Chiapas	243	60	57	57
Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón" Saucillo, Chihuahua	482	122	106	106
Escuela Normal Rural "J. Guadalupe Aguilera" Durango	390	94	92	85
Escuela Normal Rural "Prof. Raúl Isidro Burgos" Ayotzinapa, Guerrero	481	109	113	111
Escuela Normal Rural "Miguel Hidalgo" Atequiza, Jalisco	483	121	116	116
Escuela Normal Rural "Gral. Lázaro Cárdenas del Río" Tenebría, Estado de México	553	133	115	114
Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga" Tiripetío, Michoacán	559	140	137	136
Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata" Amilcingo, Morelos	362	109	82	82
Escuela Normal Rural "Vanguardia" Oaxaca	479	142	116	117
Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" Teteles, Puebla	406	109	106	106
Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles" El Quinto, Sonora	353	96	69	67
Escuela Normal Rural "Maestro Lauro Aguirre" Tamatan, Tamaulipas	232	66	69	69
Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez" Panotla, Tlaxcala	332	85	71	71
Escuela Normal Rural "General Matías Ramos Santos" San Marcos, Zacatecas	575	140	137	134
Total	6,650	1,721	1,553	1,537

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEP-DGESPE, SIBEN, SNIEE.

Vida normalista y organización estudiantil

De acuerdo con su concepción y organización como escuelas-internado al influjo de los principios y propósitos de la educación socialista, las Normales Rurales adoptaron formas peculiares dentro de su vida interna. Esto implicó una rigurosa disciplina en el estudio y el trabajo de sus estudiantes. Igualmente, la construcción de formas de organización colectiva para asumir las tareas a realizar cotidianamente para el funcionamiento de su casa-escuela. Para asegurar la observancia y cumplimiento de las actividades académicas, de trabajo y de comportamiento en el seno de la comunidad escolar, en las Normales Rurales se estableció un reglamento que sanciona el incumplimiento de las tareas o transgresión de las normas establecidas. En ese código se enlistan los hechos sancionables que se tazan en "puntos", de acuerdo con el tipo y naturaleza de la falta. El alumno que agota los puntos de que dispone al inicio de cada ciclo escolar, no puede continuar en la institución. Se sancionan inasistencias a clase, la no realización de labores de limpieza de sanitarios o dormitorios, la no participación en las actividades productivas, por mencionar sólo algunos

reprueba hasta dos materias en el ciclo escolar correspondiente y no logra una evaluación positiva en el examen extraordinario, tampoco puede permanecer inscrito. Con esta medida se preservan los espacios escolares para quienes efectivamente desean y tienen necesidad de estudiar en la Normal. Las formas disciplinarias y de estudio no son de tipo carcelario o castrense, sino expresión de un compromiso congruente y militante de sus estudiantes con el perfil de su formación como maestros rurales que ellos mismos han asumido y que están encargados de preservar. Estos son algunos rasgos y maneras de vivir y estudiar en las "rurales", que las distinguen de la mayoría de los centros educativos del país. Como se puede advertir, es muy difícil ingresar a una Normal Rural, pero sumamente fácil abandonarla para quien no se integra o adapta al régimen normalista.

La mayoría de las Normales Rurales se fundó en los cascos de haciendas expropiadas durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas². Con los latifundios expropiados se formaron ejidos y Normales Rurales. Las edificaciones de las haciendas se transformaron en escuelas a las que también

² Constituyen antecedentes del normalismo rural las Escuelas Normales Regionales y las Escuelas Normales Campesinas.

se dotó de terrenos para el desarrollo de las actividades agropecuarias de los alumnos. Nacidas en el fragor del reparto agrario y la expansión de la escuela rural socialista, desde un principio fueron estigmatizadas y combatidas por los terratenientes “despojados” y el clero que repudiaba la herejía de la educación socialista, a la vez que impulsaba una nueva revuelta cristera. Incluso, desde esos tiempos la Iglesia Católica determinó excomulgar a todos aquellos jóvenes que ingresaran a las “rurales”, algo que los normalistas siempre han tomado a broma y hasta los enorgullece. Los aliados naturales de los normalistas fueron, desde entonces, los pobladores de los ejidos y las comunidades indígenas, campesinos agraristas y maestros rurales que igualmente reclamaban educación y más escuelas para sus pueblos.

A la par del proceso organizativo que se produjo en ese periodo dentro del movimiento obrero y campesino que avanzó hacia la constitución de sindicatos nacionales que confluyeron en la formación de centrales obreras unificadas y la formación de organizaciones campesinas agraristas, los estudiantes normalistas emprendieron también la construcción de su organización estudiantil. En primera instancia se constituyeron sociedades de estudiantes en cada una de las escuelas; la representación se delegó en un comité ejecutivo electo en forma asamblearia con la participación de todos sus integrantes. Constituidas en el ambiente de la escuela y la ideología socialista que imperaba en la política estatal, el movimiento obrero y el agrarismo desde sus inicios asumieron ideológica y políticamente el carácter socialista de su organización estudiantil, orientación que sigue viva y continúa definiendo el perfil político de los normalistas rurales. De la constitución de representaciones en las escuelas, los estudiantes dieron el salto para agrupar a todos los normalistas del país en una organización nacional. Tras intentos previos, finalmente lograron su unificación en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) en el congreso celebrado en la Normal Rural de Roque, Guanajuato, en 1935. La Federación surgió como una organización estudiantil que reflejó la cohesión ideológica, política y organizativa existente en las Normales Rurales, y reivindicó su origen y composición de clase: estudiantes campesinos de ideología socialista, característica inusual en las organizaciones estudiantiles que han existido en el país. Sin duda, estos han sido factores decisivos para la continuidad y permanencia de la FECSM en un ámbito en el que es inexistente la tradición de organizaciones estudiantiles estables, representativas e independientes. Con su modo de ser –resistente y radical–, la FECSM es la organización estudiantil de más larga vida en el país.

Sin embargo, sortear los embates y persecuciones al normalismo rural y su organización estudiantil ha representado una larga y constante batalla de lucha y resistencia en la que no siempre han salido victoriosos. Han existido etapas en las que la acción gubernamental y la infiltración de grupos vinculados al partido oficial –algunos con careta de izquierda radical– han intentado fracturarla. Un episodio representativo fue el divisionismo acaudillado por el nayarita Liberato Montenegro, cuando Lucio Cabañas fue elegido dirigente nacional de la FSCM. Derrotado el profesor Montenegro, pronto aparecería como militante del PRI, y apoyado por el SNTE devendría en uno de los caciques sindicales más inescrupulosos y corruptos en la organización magisterial; su cacicazgo sindical se extiende aún por más de cuatro décadas en Nayarit. Por ello, los normalistas han aprendido a actuar en solidaridad, y ante un conflicto que ocurra en alguna de sus escuelas, siempre están presentes compañeros de otras Normales y los dirigentes de la FECSM. Asimismo, la organización federada de los normalistas resulta importante para organizar y desplegar jornadas de movilización simultánea por gran parte del país. El órgano de dirección de la FECSM lo constituye un Comité Central elegido por todas las Normales, renovado periódicamente y con sede rotatoria; es responsable de coordinar acciones y movilizaciones y representar políticamente a los normalistas rurales del país. La FECSM es el espacio de encuentro y organización de la resistencia colectiva de los normalistas rurales. Las agresiones y luchas que han enfrentado a lo largo de su historia los han educado en la pedagogía de la resistencia y la acción radical, de las que no reniegan, ni han abdicado.

La fuerza y representatividad de la FECSM están construidas desde la base estudiantil de cada Normal Rural. El método asambleario constituye la vía de participación en la toma de decisiones de sus comunidades estudiantiles y es al mismo tiempo un ejercicio colectivo que contribuye a transmitir y resguardar las prácticas organizativas que han caracterizado a su agrupación. Toda la comunidad estudiantil tiene la responsabilidad y obligación de asistir a las asambleas o reuniones convocadas, y respetar y participar en el cumplimiento de los acuerdos o actividades programadas. No son viables posturas que, una vez definidos en forma colectiva, vulneren o actúen en sentido contrario. La disciplina autogestiva estudiantil es un ángulo más de los “campesinos socialistas”. Junto al comité ejecutivo estudiantil y otras comisiones elegidas para tareas específicas, existe un órgano que ha sido permanente en las Normales Rurales: el Comité de Orientación Política e Ideológica

(COPI), instancia responsable de la formación política y el estudio de las ideas socialistas, formuladas principalmente por pensadores y revolucionarios adscritos al marxismo-leninismo; igualmente a través del estudio de la historia y el análisis de la realidad social contemporánea de México. Estas actividades son realizadas mediante la organización de jornadas colectivas, círculos de estudio o conferencias.

La lucha y resistencia de la FECSM, a lo largo de décadas, han representado el elemento vital para construir sólidos vínculos organizativos y solidarios en la preservación del normalismo rural. Al igual que el añejo arraigo de las “rurales” entre las poblaciones campesinas que las han apoyado y protegido. Para miles de jóvenes normalistas y las comunidades campesinas e indígenas de las que provienen, las Normales Rurales constituyen una de las pocas herencias sociales que aún preservan y de la que no quieren ser apropiados, por eso resisten y las defienden. Esto ha quedado evidenciado en la unión y acción conjunta que han sostenido los padres de familia y los normalistas de Ayotzinapa ante la masacre de Iguala y la búsqueda de sus hijos y compañeros desaparecidos.

Desafíos del normalismo rural

La reforma educativa sancionada en el presente sexenio ha puesto en grave riesgo el futuro de las Normales públicas y particularmente del normalismo rural. Con la modificación del Artículo tercero constitucional y la aprobación de sus leyes secundarias no sólo se ha despojado a los maestros de sus derechos laborales y se les ha sometido a un régimen de excepción distinto al del resto de los trabajadores al servicio del Estado, también ha implicado transformaciones de fondo para las instituciones educativas del sistema de enseñanza normalista. Con la imposición del llamado “curso de oposición” como vía para el ingreso al trabajo magisterial se ha cercenado el vínculo que llegó a existir entre las Normales públicas y el sistema educativo nacional. A lo largo del siglo XX, y hasta los inicios del XXI, los egresados de las Normales Rurales y otros centros de formación docente fueron integrados al sistema público de educación. Como se ha señalado, las Normales Rurales fueron creadas con el propósito de formar profesores para las escuelas de enseñanza básica, y por ello eran incorporados al servicio docente, lo que no constituía un privilegio o una condición excepcional: representaba el compromiso educativo y profesional de sus egresados tras haberse formado en una institución pública y gratuita. Sin embargo, la nueva fórmula de acceso al servicio docente significa dismantelar

la política educativa que desde el Estado se había diseñado para integrar a los educadores formados en sus propias instituciones, y por tanto representa la pérdida del carácter público e institucional del acceso al trabajo magisterial y que ahora se ha transformado en un proceso de selección bajo la fórmula de competencia individualizada.

Este mecanismo de selección para los egresados de las Normales Rurales, previsiblemente generará mayores restricciones en la matrícula escolar y la disminución del volumen de su egreso, en tanto que muchos de sus profesores egresados estarán en riesgo de que se les impida ser maestros, lo cual constituye un proceso más de exclusión contra los normalistas rurales. A sus escuelas se les ha pretendido estrangular a través de una sistemática reducción de la matrícula, pero ahora enfrentan también un incierto futuro laboral para los maestros formados en sus centros educativos.

Las “innovaciones” impuestas constituyen una aberrante regresión educativa que deforma drásticamente el acceso a la labor docente, por lo que es necesario enfatizar que los denominados “concursos de oposición” en realidad constituyen exámenes de selección que en modo alguno sirven para reclutar a los mejores maestros, como afirman las autoridades educativas. La selección tiene propósitos y destinatarios identificables: excluir a miles de jóvenes egresados de las Normales públicas, especialmente de las Normales Rurales, y de este modo avanzar en su desarticulación del sistema educativo y en su posible extinción. Sin embargo, como en otros momentos cruciales y de riesgo para las Normales Rurales, sus alumnos y su organización estudiantil tendrán la última palabra, como lo han hecho siempre, sobre el futuro de sus escuelas y las luchas que tengan que enfrentar.

Ayotzinapa. Multitudes indignadas y solidarias

La masacre de los estudiantes de Ayotzinapa ha tocado las fibras más sensibles de la mayoría de los mexicanos. Dolor e indignación son sentimientos entrelazados en las multitudes que han acompañado y se han sumado a la incansable jornada de lucha y dignidad sostenida por los normalistas y los padres de familia de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Iguala.

Más de dos meses han transcurrido desde los crímenes perpetrados y la desaparición de cuarenta y tres estudiantes. Sin embargo, sus familias y sus compañeros siguen inmersos en la incertidumbre. Hasta ahora no existen datos confiables

sobre su recuperación. Las indagatorias oficiales sobre su búsqueda han devenido en una tortuosa maraña de confusiones y ocultamientos divulgados mediáticamente para intentar convencer sobre la eficacia gubernamental y su compromiso para aclarar lo ocurrido en Iguala. Ninguno de los familiares ni de sus compañeros han confiado o aceptado tales versiones, y se mantienen en su búsqueda y reclamando que retornen vivos.

El coraje e indignación de los normalistas ha sido compartido por el pueblo guerrerense: maestros, comunidades campesinas e indígenas, estudiantes, policías comunitarias y múltiples organizaciones sociales. La población sureña ha levantado su voz y se ha movilizad con fuerza para repudiar esta injusticia y exigir el regreso con vida de los jóvenes desaparecidos, a los que también consideran sus hijos. Las multitudinarias protestas, manifestaciones y denuncias por todo el país han demostrado que la masacre de Iguala ha constituido un imperdonable y doloroso agravio para el pueblo mexicano. Asimismo, las muestras de solidaridad hacia los padres de familia y de condena a la represión estudiantil se han hecho presentes en diversos lugares del mundo.

La agresión a los estudiantes de Ayotzinapa ha desatado el hartazgo y la inconformidad social en grandes segmentos de la población mexicana, y esto es expresado a través del repudio generalizado al gobierno y a sus instituciones. De la condena de los crímenes se ha transitado a la crítica y al repudio al sistema político y sus partidos, ante las evidencias de su corrupción y complicidad en la generación del estado de degradación y descomposición en el que se encuentra sumido el país. Incluso, en múltiples movilizaciones se generalizó la exigencia de la destitución de Peña Nieto.

El país ha vivido durante estos meses en un entorno de profundo descontento social y de intensa movilización como no había ocurrido hace tiempo. Ayotzinapa y los normalistas rurales han sido el catalizador para el repunte de este renovado activismo de grupos y organizaciones sociales que exigen un país en el que se pongan por delante y se respeten la vida y los derechos sociales de los mexicanos. El futuro y la lucha lo dirá, pero la prioridad seguirá siendo la ubicación y el retorno de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y de otros en su misma condición.

Finalmente, es necesario puntualizar y reiterar que la agresión a los normalistas de Ayotzinapa constituye un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado, y específicamente un crimen político. Los que encarcelaron, torturaron,

dispararon, asesinaron y desaparecieron a los estudiantes fueron, en última instancia, los instrumentos para atacarlos, pero los que dieron la orden y fueron cómplices en la masacre de Iguala sabían perfectamente que se trataba de los normalistas rurales. Este crimen, como otros que se han perpetrado anteriormente contra ellos, debe ubicarse como resultante del encono y linchamiento político y mediático con que se ha perseguido siempre a los estudiantes socialistas de Ayotzinapa. Lo inédito en esta agresión fue la utilización, en forma visible, de grupos del crimen organizado para reprimir una movilización social-estudiantil, en combinación con los cuerpos policiacos. Seguramente más tarde o más temprano se pondrá al descubierto la participación de otros órganos de seguridad del Estado en la masacre de Iguala, a los cuales hasta ahora se les ha encubierto. En la cruzada antinormalista siempre se han entrelazado el gobierno, autoridades educativas, partidos políticos, grupos de derecha y el SNTE. No los aceptan por lo que son: indígenas, campesinos y pobres. Pero sobre todo por el perfil de su formación educativa y el arraigado compromiso social que tienen como estudiantes. Tampoco les perdonan las concepciones políticas que desde sus orígenes asumieron y han mantenido los estudiantes de las Normales Rurales. En suma, por independientes, resistentes, radicales y socialistas.

Bibliografía

- Comisión Nacional de Derechos Humanos (2012). *Investigación y recomendación sobre el caso de Ayotzinapa*, México.
- Goche, F. (2012). "Fausto Vallejo: el odio a los estudiantes". *Contralínea*, núm. 307, octubre.
- Hernández Navarro, L. (2012). "El asesinato de Minerva: la batalla por el normalismo rural". *El Cotidiano*, núm. 176, noviembre-diciembre.
- Navarro Gallegos, C. (2001). "Las Normales Rurales: espacios escolares a contracorriente con la política educativa modernizadora". Bertussi Teresinha. *Anuario educativo mexicano*. México: UPN-La Jornada, tomo II.
- Navarro Gallegos, C. (2011). "Tierra y educación: fundamentos de la escuelas rurales". *La Jornada*, 27 de diciembre.
- Navarro Gallegos, C. (2014). "Ayotzinapa. Persecución recurrente". *La Jornada*, 30 de septiembre.
- Téllez, A. (2005). *Un panorama histórico del normalismo rural*. Tesis de licenciatura en Ciencia Política, UAM-Iztapalapa.